



Reunión tripartita de alto nivel sobre la actual crisis financiera y económica mundial (Ginebra, 23 de marzo de 2009)

Cuestiones propuestas para la discusión

A. Antecedentes

1. En su 303.^a reunión (noviembre de 2008), el Consejo de Administración decidió convocar una Reunión tripartita de alto nivel sobre la actual crisis financiera y económica mundial que debía celebrarse durante su reunión de marzo de 2009. En la reunión de noviembre de 2008, el Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización examinó un documento titulado «Desarrollo de una globalización justa: Perspectivas y posibilidades para el Programa de Trabajo Decente» y el Sr. Angel Gurría, Secretario General de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se dirigió al Consejo de Administración. Tras un amplio intercambio de opiniones en el seno del Grupo de Trabajo sobre la actual crisis económica mundial, la Mesa del Consejo de Administración realizó una declaración (véase anexo I), que ha permitido orientar desde entonces la labor de la Oficina en relación con la crisis.
2. Desde noviembre, la crisis se ha extendido y agravado. Los mandantes de muchos países han contribuido a las discusiones en materia de políticas públicas para responder a la crisis y mitigar sus efectos así como para configurar una recuperación sostenible a través de medidas en el ámbito de las empresas y en los sectores económicos.

B. Acción de la OIT desde noviembre

3. La Oficina ha respondido a las solicitudes de información y asesoramiento formuladas por los mandantes, ha organizado varias conferencias y ha participado en reuniones internacionales. En la página web de la OIT sobre la crisis de empleo global se publica una actualización mensual de los últimos datos oficiales disponibles relativos al empleo y el desempleo por países con enlaces a otras páginas en las que se proporciona más información sobre informes y actividades de la OIT relacionados con la crisis¹. En el informe anual *Tendencias Mundiales del Empleo*, publicado el 28 de enero, y en el informe *Tendencias Mundiales del Empleo de las Mujeres*, publicado el 5 de marzo, se describen

¹ http://www.ilo.org/global/Themes/lang--es/WCMS_101191/index.htm.

los acontecimientos recientes y se proporcionan estimaciones sobre posibles aumentos del desempleo y de la pobreza de los trabajadores en caso de que continúe la recesión ².

4. El 15 de enero de 2009, los Ministros del Trabajo de Argentina, Brasil, Chile y México se reunieron con el Director General y con otros funcionarios de la OIT en Santiago de Chile. Los Ministros adoptaron una Declaración sobre «Respondiendo a la crisis: Crecimiento, Trabajo Decente y Estabilidad» (véase anexo II). Posteriormente, la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe organizó una reunión con los interlocutores sociales en Lima el 24 de febrero (véase anexo III). Durante la Reunión Regional Europea (Lisboa, 9-13 de febrero), los debates giraron principalmente en torno a un informe especial complementario sobre la crisis ³. Se celebró un Foro regional sobre la respuesta a la crisis económica en Asia y el Pacífico, en Manila, Filipinas (18-20 de febrero), que contó con la participación de ministros y altos funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones de empleadores y de sindicatos de 11 países, así como de altos funcionarios de organizaciones internacionales y de expertos (véase anexo IV). Se celebró otro Foro regional tripartito sobre la respuesta a la crisis económica en Africa, en Addis Abeba, los días 27 y 28 de febrero (véase anexo V).
5. Para atender a las solicitudes de los mandantes, en la labor relativa a las respuestas a la crisis se abordó la reestructuración socialmente responsable en Europa Sudoriental, las inversiones en infraestructura con alto coeficiente de empleo en Indonesia y Filipinas, el papel de las cooperativas en Africa, y la cuestión de los trabajadores migrantes en Moldova y Rusia. Se celebraron talleres tripartitos nacionales sobre la crisis en Panamá, Pakistán, Sri Lanka y Ucrania; y se realizaron análisis de las consecuencias sociales y en materia de empleo de la crisis en Bangladesh, Camboya y Chile.
6. Se celebraron en Ginebra el Foro de Diálogo Mundial sobre el trabajo decente en la contratación pública local para las obras de infraestructura (17 y 18 de febrero), el Foro de Diálogo Mundial sobre el impacto de la crisis financiera en los trabajadores del sector financiero (24 y 25 de febrero), así como un Taller técnico tripartito sobre el impacto de la crisis de los precios de los alimentos sobre el trabajo decente (5 y 6 de marzo). Se han presentado informes sobre estas reuniones a la Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas y Cuestiones Afines.
7. En el marco del esfuerzo multilateral para responder a la crisis, la Oficina está trabajando en distintos frentes para incorporar la dimensión del trabajo decente en las iniciativas de política integradas. La Presidencia italiana del G8 invitó al Director General a conducir una discusión con Ministros de 6 países en desarrollo especialmente invitados para la ocasión sobre el alcance mundial de la crisis en la Cumbre Social del G8 que se celebrará en Roma del 29 al 31 de marzo. Lord Malloch Brown, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, visitó la OIT el 4 de marzo para discutir sobre los preparativos para la Cumbre del G20 que tendrá lugar en Londres. El Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Sr. Miguel d'Escoto Brockmann, vino a la OIT el 5 de marzo para tratar de los preparativos para la próxima reunión de la Asamblea General. El 5 de febrero, el Director General participó en una reunión convocada por la Canciller Merkel sobre la coherencia de las políticas mundiales junto con los Jefes Ejecutivos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y la OCDE. Los días 26 y 27 de febrero presidió en Ginebra una reunión especial del Comité de Alto Nivel sobre Programas de las Naciones Unidas sobre las respuestas coordinadas de las Naciones Unidas a la crisis. La Oficina también contribuyó a la Comisión de Expertos sobre las

² <http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/global.htm>.

³ Documento GB.304/14/4.

reformas del sistema monetario y financiero internacional, establecida por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y presidida por el Profesor Stiglitz (quien se dirigió al Consejo de Administración el 12 de marzo con motivo de su aceptación del premio de la OIT a la investigación sobre el trabajo decente).

C. Cuestiones propuestas para la discusión en la Reunión de Alto Nivel

8. La Oficina ha preparado un documento de referencia exhaustivo ⁴, en el que se analizan la dinámica de la crisis y las respuestas de política, y se proponen medios para superarla a través del Programa de Trabajo Decente y de una acción internacional coordinada. Sobre la base de la declaración de la Mesa del Consejo de Administración, y a la luz de los datos que indican que la crisis se está extendiendo y agravando, en la Reunión Tripartita de Alto Nivel se abordará la contribución que podría aportar la OIT a las respuestas de política. En el presente documento se proponen algunas cuestiones con respecto a las cuales los participantes pueden considerar oportuno facilitar información, dar su opinión y examinar distintas opciones de política. La lista no es exhaustiva y los participantes tal vez estimen oportuno plantear muchas otras cuestiones.

I. El Programa de Trabajo Decente y otras medidas de respuesta a la crisis

9. En el documento de referencia se señala que la primera ronda de medidas de respuesta a la crisis ha tendido a centrarse en el apoyo al sistema financiero y que los paquetes de estímulo fiscal para la economía en su conjunto son más limitados y no siempre se centran suficientemente en mantener o crear oportunidades de trabajo decente.

■ *Los participantes tal vez estimen oportuno expresar su opinión sobre la mejor forma de integrar el Programa de Trabajo Decente y las empresas sostenibles como parte de la respuesta a la crisis, quizás a través de un pacto mundial para el empleo como se señaló en el documento de referencia. En particular, los participantes tal vez estimen oportuno intercambiar opiniones sobre lo siguiente:*

- i) *la prioridad concedida a las medidas que tienen una incidencia directa en el empleo, la sostenibilidad de las empresas y la protección social;*
- ii) *la forma en que los distintos mecanismos de diálogo social a nivel nacional, de las empresas y a otros niveles están contribuyendo a la formulación y aplicación de políticas, y*
- iii) *si están surgiendo amenazas contra los principios y derechos fundamentales en el trabajo.*

II. Situar el trabajo decente como elemento central de las estrategias para la recuperación mundial

10. Las reuniones regionales con los mandantes y otros actores organizadas por la OIT desde noviembre han confirmado el alcance mundial de la crisis, pero hacen pensar que su dinámica está afectando a los distintos países de forma diferente. Ello se analiza en el

⁴ Documento HTM/1.

documento de referencia, que propone un pacto mundial para el empleo con el fin de impulsar la recuperación económica a través de políticas que favorezcan el trabajo decente, reducir el riesgo de que la crisis se extienda a otros países y allanar el camino hacia una globalización más equitativa y sostenible.

11. El documento de referencia señala una disparidad en cuanto al margen para la adopción de políticas que tienen los diferentes países a la hora de responder a la crisis. Algunos pueden reunir sumas muy elevadas gracias a préstamos contraídos por el gobierno y reducir en gran medida las restricciones de la política monetaria sin provocar una fuga de capitales y una depreciación de la moneda. Otros están en una posición mucho menos ventajosa. De hecho, varios países han tenido que solicitar la ayuda del Fondo Monetario Internacional y adoptar políticas deflacionarias y procíclicas en lugar de los paquetes contracíclicos de reactivación que exigía la gravedad de la recesión. Una cuestión fundamental para los mandantes de la OIT es, pues, el margen para la acción internacional con el fin de garantizar que se proteja a los grupos vulnerables de los países vulnerables y se realicen inversiones para iniciar una recuperación sostenible. El documento de referencia plantea la idea de un fondo mundial para el empleo como medio para garantizar que, por ejemplo, la asistencia oficial para el desarrollo o la capacidad de endeudamiento de las instituciones internacionales de desarrollo se movilizan para impulsar la recuperación.

- *Los participantes tal vez estimen oportuno examinar cómo puede garantizarse que:*
 - i) *la acción para estimular la economía mundial sea verdaderamente global, evitando las soluciones aislacionistas, y*
 - ii) *se pongan en práctica mecanismos como el fondo mundial para el empleo a disposición de los países con un margen de acción reducido para la adopción de políticas, con el fin de apoyar la ampliación de la protección social, así como las medidas destinadas a mantener los puestos de trabajo y las empresas.*

III. Crear las condiciones para una recuperación sostenible y una globalización justa

12. Sobre la base de los debates de noviembre, el documento de referencia sugiere que una de las razones por las que los analistas económicos y los mercados financieros albergan dudas acerca del calado, la duración y la propagación de la recesión es que la crisis financiera puede ser síntoma de otros desequilibrios subyacentes más profundos en la economía mundial⁵. En muchos países los salarios no aumentaron al mismo ritmo que la productividad en los años de prosperidad, lo que condujo a un aumento de la proporción de los beneficios en la renta nacional, aumento que fue a parar en buena parte al sector financiero. Además, las desigualdades de ingresos han aumentado debido, en gran medida, a los sueldos situados en el extremo superior de la escala. En general, una parte del superávit de ahorro se dirigió hacia inversiones especulativas, con frecuencia inmobiliarias.
13. Las medidas de recuperación ofrecen una oportunidad para lograr un mejor equilibrio entre lo social y lo económico mediante, por ejemplo, la ampliación de los regímenes de protección social. Ello podría ayudar a impulsar la demanda global y a generar unas relaciones más estables entre factores clave del crecimiento como la inversión y el ahorro por una parte y los ingresos salariales y el consumo por otra.

⁵ Documento GB.303/WP/SDG/1.

- *Los participantes tal vez estimen oportuno analizar cómo la ampliación o la creación de regímenes de protección social y la evolución salarial podrían establecer una base de consumo para limitar la recesión, crear las condiciones para una recuperación más sostenible y paliar las repercusiones de la crisis, particularmente en los grupos vulnerables.*

14. La evolución del sector mundial de las finanzas también han afectado a la financiación de las empresas sostenibles. Dado el alto rendimiento de los instrumentos financieros derivados, las empresas productivas se vieron obligadas a buscar beneficios a corto plazo igualmente elevados. El auge de las fusiones y adquisiciones de los años previos a la crisis, entre ellas las adquisiciones apalancadas por empresas de capital privado y fondos especulativos (*hedge funds*), ha conducido a recortes y a reestructuraciones cuyo motor era la venta de activos a corto plazo, y no la inversión a largo plazo en capacidad productiva y en oportunidades de trabajo decente.

- *Los participantes tal vez estimen oportuno examinar si la reforma de la reglamentación financiera debería tratar de desalentar la especulación y favorecer la inversión en empresas sostenibles y en trabajo decente y, en caso afirmativo, de qué modo.*

IV. El papel de la OIT y del tripartismo en la definición de un enfoque integrado para la recuperación mundial

15. Como se afirma en la declaración de la Mesa del Consejo de Administración, el Programa de Trabajo Decente, tal como se articula en la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa de 2008, proporciona un marco de políticas eficaz para responder a las necesidades de los mandantes en relación con la crisis mundial. La Declaración también exhorta a la OIT y a sus mandantes a promover este enfoque integrado entre las organizaciones internacionales con mandatos en ámbitos conexos. Hay una serie de foros en los cuales tal colaboración puede desarrollarse. Además, puede ser posible entablar una cooperación similar entre organismos para responder a las solicitudes de asistencia de los mandantes ⁶.

16. Ante la preocupación de que, en ausencia de unas respuestas de política eficaces y coordinadas, surjan medidas aislacionistas y proteccionistas, los participantes tal vez estimen asimismo oportuno reafirmar el compromiso de la Declaración sobre la Justicia Social de «que la violación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo no puede invocarse ni utilizarse de modo alguno como ventaja comparativa legítima y que las normas del trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas» ⁷.

- *Los participantes tal vez estimen oportuno examinar los medios por los cuales los mandantes y la Oficina pueden promover un enfoque integrado en torno al trabajo decente en las estrategias nacionales e internacionales de respuesta a la crisis.*

Ginebra, 16 de marzo de 2009.

⁶ En la Parte II-C de la Declaración sobre la Justicia Social se afirma que: «Otras organizaciones internacionales y regionales cuyos mandatos abarcan ámbitos conexos tienen un papel importante que desempeñar en la puesta en práctica del enfoque integrado. La OIT debería invitarles a promover el trabajo decente, teniendo presente que cada organismo mantendrá pleno control respecto de su mandato. Dado que la política comercial y la política de los mercados financieros repercuten en el empleo, la función de la OIT es evaluar esos efectos con miras a que el empleo pase a ser un elemento fundamental de las políticas económicas.».

⁷ Declaración sobre la Justicia Social, Parte I, A, iv).

Anexo I

Declaración de la Mesa del Consejo de Administración de la OIT (Ginebra, noviembre de 2008)

Tras un extenso intercambio de puntos de vista en el Grupo de Trabajo del Consejo de Administración sobre la Dimensión Social de la Mundialización acerca de la crisis económica mundial que se está extendiendo, la Mesa del Consejo de Administración acordó la siguiente declaración.

Sugerimos que los mandantes de la OIT utilicen esta declaración en sus discusiones en curso sobre las respuestas nacionales e internacionales a la crisis. La declaración también servirá de guía para la labor de la Oficina en el período comprendido hasta la próxima reunión del Consejo de Administración en el mes de marzo. La Mesa del Consejo de Administración invita a los mandantes a informar al Director General de las medidas que tomen en respuesta a la crisis a fin de que las mismas puedan ser tenidas en cuenta cuando el Consejo de Administración reanude su examen de la acción de la OIT.

La crisis económica mundial

A mediados de noviembre de 2008 hay pruebas preliminares pero generalizadas de que la crisis financiera está teniendo repercusiones nefastas en la economía mundial. Las últimas previsiones económicas indican que el crecimiento en todas las regiones será considerablemente más bajo en 2008 que lo que originariamente se había previsto y mucho más bajo en 2009. Ningún país podrá evitar las consecuencias de esta situación, aunque el impacto será muy diferente de una región a otra y de un país a otro.

La Organización Internacional del Trabajo de carácter tripartito tiene vínculos profundos con la economía real en todo el planeta. Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores están especialmente preocupados acerca de los efectos de la crisis en las personas, las empresas y el empleo, así como en la cohesión social y la estabilidad. Sabemos por experiencias pasadas que las crisis económicas tienen graves consecuencias sociales y laborales que afectan en mayor medida a los segmentos más débiles de la sociedad y pueden aumentar la pobreza y la desigualdad a menos que se pongan en práctica medidas eficaces.

Se requiere una acción urgente al respecto. Necesitamos medidas globales y coordinadas para reducir al mínimo la duración y la magnitud de la recesión de la economía mundial, así como para luchar contra las posibles consecuencias adversas en el ámbito social y acelerar la recuperación.

La promoción del empleo, la protección social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el diálogo social, en el marco del Programa de Trabajo Decente de la OIT, constituye un conjunto eficaz de políticas para responder a la crisis económica actual. La visión y la estrategia adoptadas en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008, son totalmente pertinentes en este contexto.

Las seis medidas que se indican a continuación son necesarias para abordar el impacto de la crisis en la economía real y proteger a las personas, apoyar a las empresas productivas y preservar los empleos.

En primer lugar, garantizar el flujo de crédito al consumo, el comercio y la inversión y estimular una demanda adicional mediante el gasto y la inversión públicos y privados, utilizando para ello medidas fiscales y salariales a fin de estimular la demanda interna para lograr un efecto rápido, según sea apropiado, y mantener al mismo tiempo un marco de políticas propicio para la sostenibilidad fiscal. Observamos con satisfacción que varios gobiernos ya han adoptado y están considerando ese tipo de medidas.

En segundo lugar, hay que proteger a las personas más expuestas. Las medidas que se apliquen con tal finalidad deberían comprender lo siguiente: extender la protección social y las prestaciones de desempleo, facilitar oportunidades adicionales de formación y readaptación profesional, reforzar los servicios de colocación, ampliar o poner en marcha programas de empleo de urgencia y redes de seguridad específicas. Las jóvenes y los jóvenes, los trabajadores del sector informal y los trabajadores precarios, los trabajadores migrantes, y los trabajadores pobres forman parte de los colectivos que más necesitan esa protección. La salvaguardia de los sistemas de pensiones constituye una prioridad al igual que la revisión de las condiciones de crédito para los propietarios de viviendas endeudados.

Es necesario adoptar y ampliar medidas de protección social — seguridad social y protección de los trabajadores — que sean sostenibles y estén adaptadas a las circunstancias nacionales, con inclusión de la ampliación de la seguridad social a todas las personas mediante, por ejemplo, medidas para proporcionar ingresos básicos a quienes necesiten esa protección, y medidas en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de trabajo, destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esa clase de protección.

En tercer lugar, apoyar a las empresas productivas, rentables y sostenibles, junto con una economía social sólida y un sector público viable, a fin de potenciar al máximo el empleo y el trabajo decente. Se requieren también medidas adicionales para preservar un entorno propicio para la inversión y el crecimiento, en particular para las pequeñas empresas y cooperativas, que son las que dan empleo a la mayor proporción de trabajadoras y trabajadores en todas las economías. Aumentar la inversión en infraestructura orientada hacia las pequeñas empresas y las cooperativas es una de las medidas que pueden utilizarse, al igual que la iniciativa de «empleos verdes» de la OIT para facilitar una recuperación sostenible.

En cuarto lugar, para asegurarse de que el progreso social no se vea menoscabado por la crisis actual, recogemos y reafirmamos la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998), en virtud de la cual los Miembros reconocen, en el cumplimiento del mandato de la Organización, la importancia y el significado especiales de los derechos fundamentales, es decir: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

En quinto lugar, será esencial que haya una estrecha cooperación entre la OIT y sus mandantes tripartitos con el sistema multilateral para apoyar los esfuerzos desplegados por los países a fin de poner en práctica esas medidas y encontrar un terreno común para afrontar la crisis y reducir al mínimo sus consecuencias para las personas, las empresas, los derechos en el trabajo y el trabajo decente. El diálogo social y la práctica del tripartismo entre los gobiernos y las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores tanto en el plano nacional como en el internacional resultan ahora aún más pertinentes para lograr soluciones y fortalecer la cohesión social. Es esencial que la reflexión sobre las condiciones y prioridades nacionales se lleve a cabo mediante el diálogo.

En sexto lugar, hay que mantener la ayuda al desarrollo como mínimo en los niveles actuales y proporcionar líneas de crédito y apoyo adicionales para permitir que los países de bajos ingresos puedan amortiguar la crisis.

La voz y la experiencia de la Organización Internacional del Trabajo, con su estructura tripartita y su arraigo en la economía real, hacen que esté especialmente calificada para apoyar las respuestas globales a una crisis de esta índole. Los gobiernos y los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden contribuir eficazmente a la preparación y puesta en práctica de las medidas descritas más arriba.

Con una perspectiva de mediano plazo, estamos firmemente convencidos de que el crecimiento y el desarrollo sostenibles dependen de la aplicación de políticas económicas, sociales y medioambientales equilibradas. Esto requerirá una gran coherencia entre las políticas financieras, comerciales, de empleo y de trabajo, de desarrollo, sociales y medioambientales, a fin de apoyar el crecimiento económico y el desarrollo sostenibles y garantizar resultados en materia de trabajo decente.

La Organización Internacional del Trabajo está preparada, gracias a sus conocimientos especializados y su red y recursos tripartitos, para ayudar a los países a responder a la actual crisis económica. Esta labor se llevará a cabo en la forma siguiente:

- profundizando la labor de la OIT sobre las diferentes dimensiones y respuestas a las consecuencias laborales y sociales de la crisis, incluso mediante una nueva definición de las prioridades de los medios de acción de la OIT;
- brindando apoyo a los mandantes de la OIT para la elaboración de sus respuestas a la crisis económica mundial;
- colaborando con el sistema multilateral, incluido el proceso del G20 y las instituciones financieras internacionales, para alcanzar los objetivos antes mencionados;
- considerando la celebración de una reunión tripartita de alto nivel sobre la crisis y las respuestas eficaces a la misma, posiblemente antes de la reunión de marzo de 2009 del Consejo de Administración, con miras a elaborar un conjunto coherente de medidas para que las examine el Consejo de Administración.

Anexo II



OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Declaración de los Ministros del Trabajo de Argentina, Brasil, Chile y México sobre “Respondiendo a la crisis: Crecimiento, Trabajo Decente y Estabilidad”

Los Ministros de Trabajo de Argentina, Brasil, Chile y México, reunidos en Santiago de Chile a convocatoria de la OIT en el marco del encuentro “Respondiendo a la crisis: Crecimiento, Trabajo Decente y Estabilidad”, concientes de los efectos de la crisis financiera y especialmente preocupados acerca de su impacto sobre el empleo, así como en la cohesión social y en la estabilidad al interior de las naciones, compartieron las medidas que cada uno de sus países han adoptado para enfrentar el impacto de la crisis en el mundo laboral, reconociendo un nuevo papel para el Estado en su rol tutelar, proactivo y de protección del trabajo.

En virtud de dicho intercambio, los Ministros identificaron grandes coincidencias y líneas de convergencia en las acciones y medidas que han tomado en sus respectivos países para la contención del impacto negativo en el empleo y en el ingreso, para la reactivación económica a través de políticas contra-cíclicas con centro en la preservación del empleo y la creación de Trabajo Decente. La promoción del empleo, la protección social, los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el diálogo social, constituyen un conjunto eficaz de políticas para responder a la crisis económica actual.

Las medidas adoptadas por los países se inscriben en esta perspectiva, propendiendo a que los aportes estatales que apoyen a las empresas (o al sector productivo) tengan expresión directa en garantizar la protección del empleo.

Los Ministros hacen suya la Declaración de la Mesa del Consejo de Administración de la OIT sobre los impactos laborales y sociales de la crisis.

...//

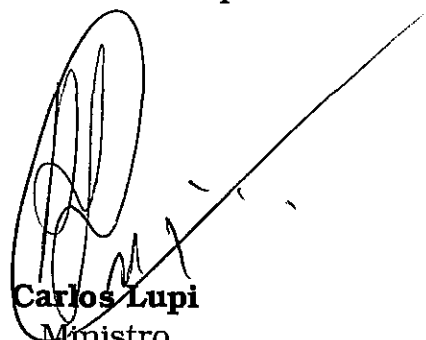
Asimismo, reconocen la importancia de la Reunión de Alto Nivel sobre la crisis a realizarse en el Consejo de Administración de la OIT en marzo próximo e instan a la OIT a continuar sus esfuerzos de coordinación y coherencia de políticas con otras organizaciones internacionales, con el propósito de poner el empleo y el Trabajo Decente en el centro de sus decisiones.

Los Ministros coinciden en la importancia de que este tema sea considerado en los debates y decisiones del G20, G8 y otras instancias del sistema multilateral, a fin de poner de relieve la centralidad del empleo y del Trabajo Decente en el contexto de una acción internacional coordinada para afrontar la crisis y sentar las bases de una nueva estrategia de desarrollo, en el contexto democrático y en el marco de una nueva gobernanza global.

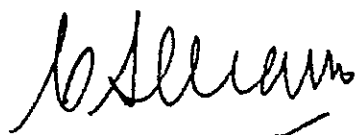
Los Ministros acuerdan reforzar sus mecanismos de coordinación en la región para evaluar el impacto de las políticas y contribuir conjuntamente a su progreso, incentivando las inversiones públicas vinculadas a la generación de empleo.



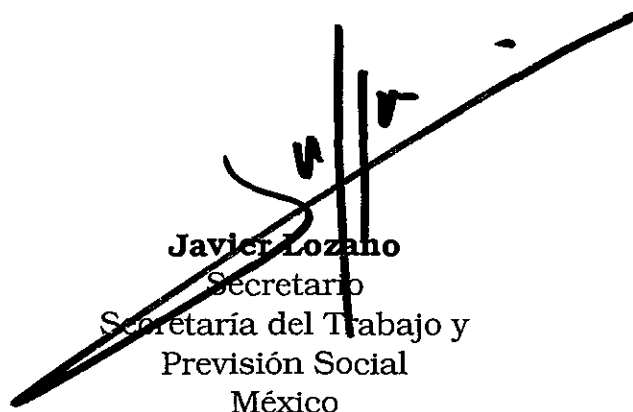
Carlos Tomada
Ministro
Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social
Argentina



Carlos Lupi
Ministro
Ministerio de Trabajo y Empleo
Brasil



Claudia Serrano
Ministra
Ministerio del Trabajo y
Previsión Social
Chile



Javier Lozano
Secretario
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social
México

Santiago, 15 de enero 2009

Anexo III

Diálogo de Interlocutores Sociales – Respondiendo a la Crisis: Crecimiento, Trabajo Decente y Estabilidad

(Lima, 24 de febrero de 2009)

A. Comentarios de los representantes empresariales

Los empleadores que han participado en este diálogo, agradecen la presentación realizada por la Oficina Regional y desean destacar lo siguiente:

1. Introducción

Existe una amplia coincidencia con la visión general sobre la gravedad de la actual crisis económica y financiera. Esta no es una crisis generada en las economías en desarrollo y de forma particular no es una crisis propiciada por desajustes de las economías latinoamericanas. A partir de un origen claramente ubicado en las deficiencias regulatorias de los mercados financieros en los países desarrollados, la economía real de la Región se está viendo duramente golpeada por esta contingencia.

No parece que las perspectivas de evolución futura de este ciclo depresivo estén claramente definidas, y en esta indefinición sin duda juega un papel de suma importancia la capacidad de reacción de los gobiernos, bancos centrales, empresas, trabajadores, y sociedades en general, a través de medidas eficaces, sostenibles y pertinentes. En este contexto, con más justificación aún, cobra fuerza el concepto de la empresa sostenible si se pretende arraigar la recuperación en los únicos factores, los de entorno regulatorio e institucional, que pueden consolidar a largo plazo dicha recuperación en un proceso sostenido de crecimiento y desarrollo.

Si bien la situación patrimonial de algunos países de la Región resulta más favorable que en crisis anteriores, se presentan rasgos distintivos que le son propios y que podrían agravar el impacto de la crisis, así como la capacidad de respuesta a la misma. En este punto, deben destacarse situaciones deficitarias en la balanza de pagos y dificultades de acceso al financiamiento tanto local como internacional necesario para enfrentar la crisis.

El sector empresarial comparte la preocupación social de la ciudadanía sobre los alcances, en términos de pérdida de puestos de trabajo, de esta crisis. Los recortes de plantilla, son para una empresa factor evidente de preocupación. Los representantes empleadores estiman firmemente que las empresas de sus países contemplan con solidaridad esta coyuntura y demandan medidas efectivas en el ámbito crediticio, regulatorio, fiscal y administrativo que faciliten a las empresas el mantenimiento de los niveles de empleo y creen las condiciones para llegar a acuerdos con los trabajadores en la aplicación de mecanismos específicos que hagan posible la retención de los trabajadores sin que por ello pueda menoscabarse la supervivencia de la empresa.

2. Recomendaciones de política

A partir de lo anterior, los representantes empresariales que comparten la visión expresada por este documento, entienden que es necesario adoptar medidas con urgencia para tratar de mitigar el efecto de la crisis en las conquistas y mejoras socioeconómicas de la Región. En este punto, dichas medidas deben inscribirse claramente en los principios reconocidos por la reunión del G20 el pasado mes de noviembre: economía de libre mercado, respeto al estado de derecho y a la propiedad privada, libertad de comercio e

inversión y mantenimiento de mercados competitivos. En particular, es de especial importancia subrayar la necesidad de que la crisis como factor coyuntural no suponga desvíos con respecto de cuestiones estructurales, y concretamente respecto de la creencia compartida desde hace años, de que la Región debe continuar avanzando en la mejora de las condiciones de seguridad jurídica y del adecuado funcionamiento de las instituciones en sistemas democráticos y fundados en la libertad en todas sus dimensiones.

Teniendo en cuenta los factores de base antes mencionados, los empresarios demandan en este punto y, en especial, en referencia al contexto actual, una aproximación que tenga en cuenta una serie de elementos esenciales para afianzar la recuperación:

- Es absolutamente prioritario que las empresas, los trabajadores y la sociedad en general perciban con claridad la restauración de un clima de confianza que permita recuperar la estabilidad y posibilidad de planificación a futuro de las transacciones y proyectos de los individuos y de las empresas. Y ese clima de confianza se alcanzará cuando se perciba claramente que se están abordando las causas de las crisis y no meramente sus consecuencias.
- Una regulación más eficiente y transparente de los sistemas financieros en un marco de estrecha coordinación y cooperación internacional. El papel de los bancos centrales, sistemas financieros y las entidades supervisoras de los mercados de valores en el establecimiento de esquemas de regulación transparente y coordinada es absolutamente central en este ámbito. Los cambios aquí deben apostar por mejores normas, y no necesariamente por más normas. La crisis ha reflejado con claridad la necesidad de que el mercado cuente con marcos regulatorios eficientes, que protejan a individuos y empresas al tiempo, sin alterar u obstaculizar su función básica de impulsar el crecimiento de la economía en su conjunto.
- Una utilización adecuada y sostenible en el tiempo de los paquetes de estímulo fiscal, asegurando en los mismos la finalidad de aumento en el nivel de gasto de los beneficiarios finales y evitando el desplazamiento del sector privado por parte de programas masivos de inversiones públicas.
- El respeto a los derechos y principios fundamentales en el trabajo, recogidos en la Declaración de la OIT de 1998.
- Estimular y desarrollar el potencial de las políticas e iniciativas que, desde la voluntariedad, las empresas desarrollan bajo el concepto de la responsabilidad social, complementando, desde el ángulo de la ética empresarial, las aspiraciones y finalidad de las legislaciones y normativa gubernamentales.

Desde esta base, un enfoque equilibrado de medidas de política, debería considerar:

- Sin cuestionar la posibilidad de una acción pública de peso a través de las inversiones en obras de infraestructura y uso intensivo de mano de obra para estimular la creación de empleo como medidas específicas en esta coyuntura (especialmente las dirigidas a los jefes de hogar que quedan desempleados), la recuperación sostenida de la economía no podrá afianzarse sin un respaldo decidido a la creación de PYME y a la mejora del entorno regulatorio de la actividad de éstas. Las PYME son el mayor empleador de la Región y la recuperación de tasas sostenidas de creación de empleo pasa claramente por el apoyo a las mismas en los términos mencionados.
- Mejorar la liquidez, aliviando en la mayor medida posible las actuales restricciones crediticias. Las empresas necesitan liquidez para invertir, pagar salarios y disponer de un soporte financiero que permita mantener el empleo.
- También en una mirada que supere la coyuntura, y vaya más allá a una recuperación sostenida en el tiempo, es prioritario mantener el apoyo a la educación y a la formación como factores claves para el crecimiento y la productividad del futuro. Mantener en este punto un conjunto de calificaciones que responda a las necesidades del mercado de trabajo, contribuirá a asegurar la disposición de las calificaciones

necesarias que requiere todo proceso de desarrollo. En este mismo contexto, la adecuación de las políticas educativas y sistemas de formación profesional a la evolución de las necesidades del sistema productivo, pasa forzosamente por establecer canales de colaboración más estrechos entre ambos ámbitos, así como por incidir en dos conceptos fundamentales: empleabilidad en trayectorias de trabajo decente y productivo y fomento del espíritu empresarial.

- Mantener el apoyo a la liberalización de los flujos comerciales y de inversión y evitar el recurso a nuevas barreras arancelarias. La defensa de una economía global abierta ha venido proporcionando un impacto evidente en la reducción de la pobreza, la disponibilidad de más productos a precios más competitivos para todos los escalones sociales y el avance de la democracia y del sistema de libertades que la respalda. En este punto, resulta fundamental continuar avanzando en la integración productiva a nivel regional, en el camino de poder brindar una respuesta conjunta a la crisis.

3. *El papel de la OIT*

La actual crisis económica y financiera presenta un conjunto de desafíos que van más allá de las competencias y mandato de la OIT. La OIT no está equipada, puesto que no es su mandato, para abordar las causas de la crisis, pero sí puede jugar un importante papel en promover ideas y abordar algunos de los efectos que la crisis está generando.

La OIT puede jugar un papel esencial a la hora de contribuir a la creación de las condiciones que permitan en cada caso convertir las estrategias nacionales para el abordaje de la crisis, en procesos que cuenten con el máximo respaldo de los actores sociales y económicos. Se trata de aprovechar al máximo las capacidades técnicas de la Organización, su composición tripartita y su cercanía y conocimiento de todas las dimensiones que inciden en el empleo, como factor especialmente relevante en toda política dirigida a la recuperación post crisis, con el objeto de poder atenuar algunos de los efectos, especialmente en el mercado de trabajo.

En este contexto, los representantes empresariales que han participado en la elaboración de este documento estiman que el papel de la OIT debe reforzar por tanto:

- El diálogo social, tanto como herramienta de delineación de los marcos de políticas nacionales que establezcan las medidas diseñadas para afrontar la crisis, como a nivel bipartito, a la hora de definir posibles acuerdos para priorizar el mantenimiento del empleo en la empresa junto con su futura continuidad, así como las medidas y estímulos necesarios para apoyar esta línea de acción.
- Analizar periódicamente y con la debida frecuencia el impacto de la crisis en los mercados de trabajo, ofreciendo información estadística actualizada de las tendencias de dicho impacto en períodos que permitan anticipar la toma de decisiones y el diálogo de los actores sociales.
- Recopilar buenas prácticas, y ejemplos de iniciativas públicas, y en asociación con el sector empresarial para enfrentar los efectos más negativos de la crisis en lo relativo a regulaciones y medidas que favorezcan la creación de empleo, articulación de redes y medidas de protección social, intermediación laboral, reconversión, etc.
- Ofrecer información y debatir sobre medidas destinadas a favorecer el desarrollo del tejido empresarial en las PYME en el contexto de crisis.
- Propiciar y apoyar la adaptación a la realidad de la Región del concepto de la «empresa sostenible», tal y como se acordó en el marco de la 96.^a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, y abordando especialmente, más allá de la coyuntura actual, el refuerzo de las instituciones y los sistemas de gobernanza que sostienen la actividad empresarial. Esto requiere asegurar que los recursos humanos, financieros y naturales sean combinados de forma equitativa y eficiente para generar efectos positivos y sustentables en la innovación y en la productividad. Para mejorar

las condiciones de dignidad del trabajo es necesario profundizar en la sostenibilidad de la propia empresa.

B. Comentarios de los representantes de los trabajadores

Las consideraciones que a continuación se presentan son una primera aproximación a un análisis que debiera ser más profundo y constructivo, en el marco de la promoción y defensa del trabajo decente.

1. *Diagnóstico: la naturaleza y el alcance de la crisis*

- A la crisis financiera actual, centrada en la «economía casino» se suman las crisis productiva, alimentaria y ambiental, las cuales profundizarán los déficit de trabajo decente.
- En la generación de la actual crisis no se han acogido las alertas y propuestas de los trabajadores y sus organizaciones, y de otros sectores de la sociedad civil.
- Es importante también dejar claro el cuestionamiento al comportamiento *antiético* y codicioso que ha hecho explotar la crisis.

Análisis realizado por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas CSA

- A. Existen ya evaluaciones que tienden a sugerir que el impacto de la crisis será mayor en la periferia que en el centro. En el caso latinoamericano-caribeño hay que partir de señalar que hasta 2008 los países de la región venían de beneficiarse de un «verano» de seis años, con un crecimiento económico promedio (del 5 por ciento en 2002-2007 y todavía 4 por ciento en el 2008), solo comparable con el de los años setenta, que era parte del largo ciclo iniciado en la segunda posguerra mundial. Por entonces, se había dejado atrás la «década perdida» de los ochenta y la década de neoliberalismo y ajustes estructurales de los noventa. Comparativamente, este período es mejor que aquel, porque ese crecimiento se ha extendido a todos los países, y no sólo a los más grandes que determinan el promedio (Brasil y México), los cuales crecieron por debajo del 8-9 por ciento de Argentina, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, y del 7-8 por ciento de Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay.

Como resultado, también mejoraron algunos de los indicadores laborales (desempleo, cantidad y calidad de las ocupaciones, poder de compra de los salarios).

- B. Esta evolución positiva tenía como fundamento el ciclo internacional mencionado, en el sentido que éste impulsaba la demanda de «commodities» (minería, petróleo, alimentos), permitía un fácil endeudamiento, garantizaba un flujo de exportaciones, y sostenía otros ingresos en favor de estas economías, resultando en crecientes superávits en cuenta corriente, algo nuevo en América Latina y el Caribe. Ahora, la situación se revierte, en términos de:
- Menor precio de las materias primas, con el petróleo como un extremo (de 150 dólares el barril a menos de 50), pero extendido al cobre, soja, trigo, girasol, a lo que se suma la menor demanda en volumen, con evidentes impactos en países especializados como Venezuela, México y Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Argentina y Uruguay.
 - La baja de la demanda de productos industriales, como el sector automotriz de México y Brasil.
 - Reducción del flujo de inversión extranjera directa y, en general, de préstamos bancarios a bajo interés. En los países de origen se evaluará la ventaja de quedarse internamente, donde el riesgo crediticio es más fácil de manejar y, por

otra parte, estarán sujetos a las condicionalidades antes mencionadas. Si el dinero sale, de todas formas, de esos países, buscarán colocaciones seguras, como los bonos del tesoro norteamericano (y el oro). Este factor impacta en países que, como Brasil, han convertido el ingreso de capitales en un elemento central de su macroeconomía. Igual efecto se produce cuando los fondos de inversión locales se desprenden de activos con el mismo destino (o incluso las cajas de ahorro), colaborando así en el derrumbe de las bolsas y de los ahorros previsionales del sistema de capitalización individual (muy fuerte en Chile, México y Argentina).

- Aunque la banca en América Latina y el Caribe estaba poco expuesta de forma directa a los derivados financieros, es natural que reduzca y encarezca los créditos, en lo que juega sin duda un papel importante el componente extranjero del sector, que quedará sujeto a las políticas defensivas de las casas matrices, llegando incluso a la liquidación de activos en el exterior.
 - Puede haber también fuga de capitales locales. De hecho, en Argentina y Brasil ya ha habido un adelanto de esta tendencia, en los últimos meses de 2008, por cifras importantes, en el caso brasileño el monto fue de 13.000 millones de dólares, elevándose a 23.000 millones en el caso argentino, lo que es muy superior a los 19.000 de la crisis del 2001 ¹.
 - El impacto directo del desplome de la burbuja financiera entre las empresas latinoamericanas que habían invertido en colocaciones. Es el caso de empresas brasileñas (Sadia, Aracruz, Votorantim) y mexicanas (Comercial Mexicana, Vitro, Cemex).
 - Los avances en la evasión fiscal, que es uno de los aspectos positivos del período de auge, muy posiblemente quedarán sometidos a prueba en la nueva etapa.
 - Donde el turismo extranjero es importante (9 por ciento del PIB regional), se reducirán los flujos, como otro derivado de su menor consumo, arrastrando además a la negociación de la construcción e inmuebles.
 - Donde las remesas de inmigrantes en el exterior es importante (casi 20 por ciento del PIB en países centroamericanos), la crisis reducirá esta fuente de ingresos, con el elemento colateral de que es previsible un reflujó de retorno. En el caso mexicano, se estima una caída del 15 por ciento en el monto durante 2009. Asimismo, el 35 por ciento de los inmigrantes en los Estados Unidos quiere volver, a causa de una expectativa negativa sobre el aumento del desempleo hispano en ese país.
 - Además de la cesantía, es de esperar que la tasa de desempleo aumente debido al crecimiento de la fuerza de trabajo derivado de la búsqueda de empleo por parte de las mujeres hasta el momento ocupadas de las tareas de su casa (destacado en la coyuntura chilena).
- C. Existe también una dimensión intralatinoamericana de contagio. Por ejemplo, el menor dinamismo brasileño (y el distinto ritmo de las devaluaciones cambiarias) impactará fuertemente en sus vecinos del Mercosur, en un triple campo: la corriente comercial, el flujo de inversiones, y el turismo. Parecida situación se presenta entre México y Centroamérica-Caribe. Pero, además, es de esperar que aparezcan tensiones en los procesos de integración subregional, expresado en medidas de excepción a los

¹ En el caso argentino, los problemas se extienden a una creciente remisión de utilidades de empresas extranjeras (que pasaron del 1 al 2 por ciento del PIB, en 2004-2008. La fuga de capitales ya era también elevada en 2007 (9.000 millones de dólares).

acuerdos ya alcanzados (ello se ha manifestado claramente ya en el MERCOSUR, por parte de Brasil y Argentina).

- D. En otro plano, han comenzado las presiones en algunos para que se adopten algunas medidas, o se retroceda de otras, en el plano laboral tendientes a una mayor flexibilidad laboral, para una moderación de la política de despidos ².
- E. Es evidente, además, que la política de reducción del peso de la deuda y la acumulación de reservas que han seguido estas economías en el período de auge, permiten ahora amortiguar la crisis. En este marco, un evidente déficit de las economías de la región, excepto Chile y en menor medida Perú, es la no construcción de fondos anticíclicos durante el período en que ello era posible por la alta demanda externa. Un caso particular es la Argentina, que en 2006 aprobó un fondo fiscal de este tipo, aunque el Gobierno no efectuó aporte alguno en los dos años siguientes.

Otro elemento de contrapeso es que los menores precios de los «commodities» derivados de su menor demanda mundial llevará seguramente a la baja de la inflación interna, que se venía sintiendo fuertemente en la región, alineando la subida de precios en un 10 por ciento anual. El resultado final dependerá del efecto inverso derivado de las devaluaciones.

- F. En consecuencia, el círculo vicioso de problemas derivado de la crisis tiene una base común, pero se potencia por la crucial importancia que tiene el factor externo. En especial, la doble menor disponibilidad de recursos fiscales, desde el exterior y desde la recaudación impositiva interna, modifica la situación previa de algunos países que destinaban buena parte de esos recursos a un gasto público procíclico (incluyendo el gasto social, y antipobreza (Brasil, Uruguay). A veces (como en Argentina) también se ha destinado al subsidio de los precios de los bienes básicos.
- G. En algunos países de la región también se había acompañado la tendencia de los países industrializados que ha llevado a la crisis financiera. Un ejemplo notable es México, donde durante toda esta década los bancos tradicionales y otros nuevos (como los vinculados a los hipermercados) han sobreexpandido el consumo con base en cuentas (la mayor parte tarjetas plásticas, por un total de 52 millones) otorgadas sin garantía alguna, a sectores de clase media baja, a altísimas tasas de interés, que ya en 2008 iba en dirección a un alto porcentaje de incobrabilidad (10 por ciento). La mayor parte de este fenómeno es atribuible a las sucursales de megabancos norteamericanos y europeos. Otro ejemplo notable es que Chile últimamente estimuló a los miembros de las aseguradoras privadas de pensión a pasarse de colocaciones tradicionales a otras innovadoras, de alto riesgo («Fondo A»), las que, al alcanzar más del 90 por ciento del total de colocaciones, explica la gran pérdida de ahorros en los últimos meses (20 por ciento del total de ahorros, equivalente a nueve años, por 20.000 millones de dólares, que es casualmente el monto del fondo anticrisis acumulado). Incluso se ha señalado que, en Brasil, el «cheque especial» ha estimulado un consumo basado en tasas de interés aún más altas que las de por sí elevadas a nivel general.
- H. También es evidente que este período incluye un retroceso en el desarrollo estructural de los países de la región en la medida que, respondiendo a la demanda mundial, ha habido una «reprimarización» productiva que va en dirección contraria a las necesidades de una industrialización plena.

² En México, el Gobierno ha planteado la conveniencia de incluir entre las medidas anticíclicas la postergada reforma laboral, que tiene importantes elementos de flexibilización. En Chile existen presiones para postergar la decisión de pago del domingo entre trabajadores que no gozaban de ello. En Brasil, el Presidente Lula ha tomado posición sobre esta disyuntiva, al calificar como «absurdo» que se quiera aumentar la rotación, cuando ya es altísima.

2. **Propuestas de políticas: la superación de la crisis sobre nuevas bases**

- En la crisis se interrelacionan factores coyunturales (fundamentalmente financieros, pero no exclusivamente) con otros de carácter estructural e históricos, pero también otros más recientes, por lo que *la forma de enfrentar la crisis* debe incluir también un tratamiento de los factores estructurales, para sentar nuevas bases para el desarrollo sostenible, ético y con justicia social.
- Algunos de los factores estructurales son:
 - a) La injusta distribución de la riqueza.
 - b) La integración geográfico-económica al interior de los países, pues las economías nacionales están sustentadas en tres o máximo cuatro regiones que generan el 70 por ciento o más del PIB.
 - c) El intercambio económico desigual y el proteccionismo de las grandes economías.
 - d) La elevada dependencia científico tecnológica.
 - e) La baja participación social en la definición de las políticas públicas y su monitoreo.
 - f) La falta de coordinación de políticas y de centralidad del trabajo, que tiene diversas consecuencias, entre las que destacan la ausencia de políticas públicas para el pleno empleo integrales y la falta de un «ancla de empleo» en los criterios de operación de los bancos centrales hoy basada fundamentalmente en el control de la inflación.
 - g) El fortalecimiento del Estado como ente regulador, inductor y redistribuidor de la riqueza.
 - h) La baja y deficiente cobertura de la protección social.
 - i) La exclusión social, incluso en áreas que tradicionalmente fueron de servicios públicos, como la educación y la salud a lo largo de la vida.
 - j) La ausencia de sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo.
 - k) La desigualdad de género, etc.

En este período, la CSI ha presentado la posición del sindicalismo internacional, en documentos de septiembre, noviembre y enero. En noviembre, tales comunicaciones fueron la «Declaración de Washington», inmediatamente previa a la Cumbre del G20, seguida luego de una evaluación de la propia declaración de los países miembros de la Cumbre. En enero, la CSI presentó el documento «No a la economía casino» en el Foro Social Mundial (Belem). La siguiente es una síntesis de esta posición.

- A. El sindicalismo mantiene su crítica a la gobernanza global, encuadrada en el modelo de globalización vigente, que tiene como eje central al comercio injusto y, como resultado, un gran aumento en la desigualdad entre/dentro de países, entre el capital y el trabajo, y entre ricos y pobres. Considera que con la crisis ha llegado el momento de este cambio, con el sindicalismo ocupando un sitio en la mesa de negociación. Este enfoque exige el establecimiento de un «nuevo trato» mundial, en el que se cree un sistema internacional de gobernanza económica que lleve a resultados más incluyentes, justos y democráticos. El objetivo es integral, al ir más allá de la regulación de los mercados financieros mundiales y los sistemas monetarios, para enfrentar todos los desequilibrios del crecimiento y los flujos de capital, así como tratar de resolver la crisis de la justicia distributiva, garantizando un crecimiento más equilibrado de la economía global.

Se requiere construir un sistema económico ecológicamente sostenible, socialmente equitativo y geopolíticamente equilibrado. El crecimiento económico deberá contribuir a la creación de empleos decentes, al tiempo que se protege el medio ambiente, y se redistribuyen sus frutos, para reducir el nivel de desigualdades sin precedente que se registra actualmente.

El nuevo sistema económico también deberá generar un crecimiento verde. Además de la urgencia de actuar para la preservación del planeta, la protección del medio ambiente presenta enormes oportunidades en materia de creación de empleo. Las inversiones públicas en infraestructura, transporte colectivo y energía renovable son necesarias en todo el mundo. La propia recuperación económica puede encararse mediante inversiones ecológicamente responsables.

- B. En este marco, los planes de relanzamiento actual son sin duda necesarios, pero resultan insuficientes. No basta con inyectar liquidez en la economía, es necesario además cambiar los principios básicos.
- C. La agenda en el plano internacional se centra en:
- una defensa del multilateralismo, estableciendo normas justas en materia de comercio internacional, para contribuir al desarrollo de los países y a la reducción de las desigualdades. Limitaciones a los comportamientos especulativos en los intercambios comerciales, incluidos los productos básicos y los mercados energéticos. Este multilateralismo debe incluir las cuestiones vinculadas al empleo como un elemento central;
 - la construcción de una nueva arquitectura financiera y económica mundial³, ya que ninguna de las instituciones existentes tiene ni la envergadura ni la credibilidad para sacar adelante esta tarea. Incluye una paridad del poder de voto respecto de los países industrializados, así como, más en general, que el cambio en la gobernanza global se realice con la participación de conjuntos de países más amplios que el G8, como el propio G20. Otros lineamientos más detallados son: aplicación de una «tasa Tobin», reglamentaciones de las inversiones extranjeras y los flujos de capital que incluyan el cumplimiento de normas de gobernanza y transparencia internacionalmente reconocidas; ampliación de los préstamos de emergencia del FMI e incremento de la ayuda del Banco Mundial y los organismos de las Naciones Unidas para países en desarrollo y países emergentes afectados en su balanza de pagos a causa de la crisis financiera y alimentaria, con «condicionalidades positivas»; control de la circulación monetaria y financiera en el mundo, así como del mercado de productos derivados, limitando la especulación y concentrando el papel de los mercados en la financiación de las empresas; rendición pública de cuentas por los bancos centrales; poner fin a los centros financieros «off-shore» y otros paraísos

³ Es frecuente utilizar la expresión «volver a *Bretton Woods*», pero ello debe ser interpretado en el sentido de ir más allá de lo acordado en aquella oportunidad. Tanto el G20 como la CSI van en la dirección de considerar que se debe ir más lejos. Es que el «keynesianismo global» que estaba entonces en la mesa de negociaciones, ha sido la propuesta más audaz de reformulación del orden económico internacional: las nuevas organizaciones mundiales a crearse (el FMI y el Banco Mundial) debían garantizar una coexistencia entre el libre comercio y un sistema de protección, basado en un dispositivo de ajuste de los créditos, según el cual se sancionaría a los países con excedente comercial. Estos países debían aceptar una discriminación en contra de sus ventas externas o ampliar sus mercados internos para absorber las importaciones provenientes de los países con déficit comercial. Cada país deudor tendría derecho a una línea de crédito en un sistema internacional de pagos, apoyado en un mecanismo de compensación y una moneda de reserva mundial (el «bancor»). En la práctica, no se alcanzó acuerdo, con la efectiva tendencia de la posguerra hacia una «economía de los acreedores» (es decir, de los países ricos), en vez de una «economía de los deudores», con las instituciones financieras internacionales como garantes.

fiscales; creación de un fondo mundial para la protección social. El sector financiero ha de dar prioridad a la economía solidaria, fomentando las cooperativas, mutuas y agencias de microcrédito, también en los países en desarrollo. Los salarios de los directivos, banqueros y otros intermediarios financieros deben estar reglamentados;

- la concreción de la meta histórica del 0,7 por ciento del PIB de los países industrializados con destino a la cooperación al desarrollo, con un aumento en su calidad.

- D. A nivel nacional, se necesitan Estados que recuperen su lugar. Sólo la intervención pública puede garantizar la cohesión social, garantizando resultados socialmente equitativos y sostenibles. Se necesita: una política protectora de los regímenes de pensiones, determinación de salarios mínimos decentes y salarios reales acordes con los incrementos de productividad y respeto del derecho de los trabajadores/as a formar sindicatos libres y a negociar colectivamente la redistribución de beneficios.

3. **El papel de la OIT: La Agenda de Trabajo Decente**

Hoy es aún más vigente la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente 2006-2015. En ese sentido es importante:

- Resaltar que en varios de los Programas de Trabajo Decente que se han suscrito a nivel nacional, la dimensión de la libertad sindical y la negociación colectiva no está muy desarrollada, cuando debe ser un aspecto indivisible de la promoción y defensa del trabajo decente.
- Establecer indicadores de trabajo *decente consensuados* para un monitoreo adecuado que permita tomar las medidas preventivas necesarias.
- Fortalecer la transversalidad de las políticas de igualdad de género y no discriminación, con atención especial a *los sectores vulnerados ante la crisis*.
- Lograr una *mayor incorporación y retención en el sistema educativo de calidad*, así como la continuidad en el proceso de formación y reducción de los factores de fracaso escolar y deserción/expulsión.
- *Rescatar a la educación como un derecho humano que debe estar garantizado por una política pública, no sujeta a las variables del mercado*, que ha restringido sustancialmente el acceso de los estratos de ingreso más bajos a la educación superior, técnica y media, además de ser un factor importante de endeudamiento. La educación y la formación profesional debe contribuir al desarrollo integral del ser humano, facilitando su inserción y trayectoria laboral.
- Reforzar y, en su caso corregir, las políticas públicas de protección social para salvaguardar y ampliar progresivamente su cobertura, universalidad y solidaridad. En el capítulo de seguridad social deben recuperarse los ahorros perdidos y garantizarse su intangibilidad.
- Priorizar en las políticas públicas *la promoción, la defensa y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, en particular, la libertad sindical y la negociación colectiva*.
- Los contenidos del diálogo social deben contemplar tanto los *salarios dignos como la condiciones de trabajo*.
- Crear y/o reforzar, allí donde existieren, instancias tripartitas de prevención, mediación y conciliación.

El diálogo social y el tripartismo

El desafío de los planes anticíclicos para la sociedad latinoamericana-caribeña es enfrentar y superar los obstáculos de su factibilidad: por lo tanto, el diálogo social constituye un instrumento clave para que tales planes tengan el necesario grado de consenso. *Los pilares del diálogo social son la libertad sindical y la negociación colectiva.* La confianza, credibilidad, derecho de información, así como voluntad y decisión política de los actores para alcanzar acuerdos, constituyen condiciones ineludibles para la efectividad del diálogo social. En este escenario, el papel de la OIT es fundamental.

La dimensión internacional de la crisis

La transformación del sistema de gobernanza global requiere la participación de la OIT, quien debe liderar a nivel internacional una respuesta a la crisis basada en el empleo y la justicia social, de acuerdo al mandato de la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa en su integridad.

Compartimos la crítica de los *Global Unions* (CSI, TUAC y FSI) a la declaración del G20 de noviembre pasado en cuanto a la exclusión de la OIT a pesar de ser parte del sistema de las Naciones Unidas.

- La Oficina debe realizar una evaluación periódica sobre el cumplimiento de las metas fijadas en mayo de 2006 en Brasilia.

Anexo IV

Responding to the Economic Crisis – Coherent Policies for Growth Employment and Decent Work in Asia and the Pacific

(Manila, 18–20 February 2009)

Summary Report of the High-level Regional Forum convened by the ILO, Asian Development Bank, and Department of Labour and Employment of the Philippines¹

I. Introduction

Together with the Asian Development Bank (ADB) and the Department of Labor and Employment of the Philippines, the ILO organized a High-level Regional Forum on Responding to the Economic Crisis – Coherent Policies for Growth Employment and Decent Work in Asia and the Pacific, on 18–20 February in Manila. The Forum responded to the call of the Officers of the Governing Body, at the November 2008 session, for regional consultations on the impact of the global financial crisis and policy responses. The Forum was made possible with the assistance of the Government of Norway.

Participants included ministers and senior government officials of employment and finance departments, economic and social policy experts, representatives of international organizations and leaders of employers' organizations and trade unions.² The format of the Forum provided for review of a series of reports on current developments in the countries of the region and in-depth examination of policy responses. It was structured into deliberations on impact and policy response at five levels: (a) global and regional, (b) country; (c) key areas for coherent policy response; (d) mechanisms for policy coherence across institutions; and (e) tripartite review of action to respond to the crisis.

As highlighted in the regional overview paper prepared for the Forum,³ the impact of the global financial crisis on Asia built up during the last quarter of 2008 and into 2009 as exports plummeted leading to factory closures and large-scale layoffs in the more export-reliant countries. GDP growth in Asia fell from 7 per cent in 2007 to 5 per cent in 2008 and is expected to decrease further to 2.3 per cent in 2009.⁴ The Office estimates that unemployment in the Asia–Pacific region could rise by more than 23 million in 2009. As

¹ Complete meeting documents, including the programme, list of participants, the regional overview paper and other thematic and country papers, are available on the Forum web site, www.ilo.org/asia/whatwedo/events/lang--en/WCMS_101303/index.htm.

² Eleven countries sent delegates: Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Thailand and Viet Nam. Representatives from Japan, Republic of Korea and Singapore attended as observers.

³ ILO: *The fallout in Asia: Assessing labour market impacts and national policy responses to the global financial crisis*, Bangkok, 2009.

⁴ ILO estimates based on IMF: *World Economic Outlook Update: Global Economic Slump Challenges Policies*, January 2009.

stressed by Secretary Roque of the Philippines in opening the Forum, a considerable number of businesses in Asia and the Pacific were on the brink. Governments were seeking to counteract the downturn.

The ADB Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development, Ursula Schaeffer-Preuss, called for coherent policies focused on economic but also including social and environment dimensions that incorporate three elements: employment programmes generated by infrastructure needs in rural and urban poor communities, mechanisms to protect poor and low-income households, and social expenditure for health and education to build human capital.

UN Assistant Secretary-General for the Department for Economic and Social Affairs, Jomo Kwame Sundaram, gave a comprehensive analysis of the origins of the crisis, the policy options and the importance of a globally coordinated response. He proposed priorities for reform: strengthening of counter-cyclical financial regulations, to better prevent and manage crises, capital account management techniques to stem undesirable or excessive capital inflows, affordable financing for productive long-term investment, stimulating domestic demand, especially for job creation to offset weakening foreign demand, and building and improving physical and social infrastructure. Universal social protection was a preferred option rather than targeted safety nets, especially in a crisis situation. He recommended fiscal stimulus even in countries with limited fiscal space and warned that protectionist measures were likely to increase, with negative impact on small countries.

Sachiko Yamamoto, ILO Regional Director for Asia and the Pacific, highlighted the findings of the regional overview paper, providing an assessment of the economic and labour market impacts of the crisis and the national policy responses in the region. She noted that contract workers, international migrants, workers in export and manufacturing sectors and young jobseekers are particularly vulnerable. She emphasized that concerted regional action focused on creating employment and income to stimulate consumption and domestic demand was required. This called for measures that maximized the employment impact of fiscal stimulus packages, protecting the poor and the vulnerable, supporting small and medium-sized enterprises and a «green recovery». In addition, Ms. Yamamoto underlined the importance of involving social partners in policy design at all levels, ensuring the respect for core labour standards, and the need for more balanced growth strategies in developing Asia.

II. Common findings on areas for action to respond to the crisis

A series of common findings on areas for action emerged from breakout group discussions among the participants. They focused on four main areas: job creation and protection, social protection, social dialogue and respect for workers' rights, and international and regional support.

(i) Job creation and protection:

- Appropriate expansionary monetary and fiscal policy measures to stimulate consumption, domestic demand and job creation.
- Support for national tripartite mechanisms to develop coherent policies for employment growth and employment protection.
- Support for enterprises, especially SMEs.
- Employment-intensive public works programmes, including infrastructure.

- Negotiated agreements based on collective bargaining for flexible hours, wages, temporary layoffs and severance packages. Respect for core labour standards and existing labour laws.
- (ii) Social protection:
- Support for vulnerable groups, including through conditional cash transfer schemes and expanded social insurance measures.
 - Phased expansion of coverage of unemployment benefits, medical care and pensions.
 - Minimum wages for informal workers.
- (iii) Social dialogue and respect for workers' rights:
- Develop and strengthen legal framework for social dialogue.
 - Provide capacity building for social partners.
 - Respect for international labour standards, labour laws and decent work.
 - Tripartite consultation on policy design and implementation to also include civil society representation and a gender-sensitive approach.
 - Ensure transparency in negotiations.
- (iv) International and regional support:
- Ensuring official development assistance (ODA) flows and multilateral support for vulnerable countries with reduced policy space.
 - Strengthen international and regional economic policy coherence, including trade cooperation and the removal of trade barriers.
 - International organizations to focus on capacity building, including in formulating stimulus packages.
 - Minimal conditionality on loans through the international financial institutions (IFIs).
 - ILO action to embed the Decent Work Agenda at all policy levels through consultation, dialogue and capacity building.

III. *Issues raised in policy discussions*

(a) Global and regional impact and policy response

Export growth had helped the growth of the developing economies of Asia, but the sudden cut in foreign demand was damaging and suggested that the urgent policy priority was now the generation of domestic demand. Counter-cyclical fiscal stimulus packages and boosting the spending power of low-income groups were seen as the most effective way of making this shift. Long-term investment was needed from development banks to increase output and employment. Social protection needed to be expanded in order to support vulnerable low-income groups. The ADB estimated that the crisis could increase the number of poor living below the US\$1.25 per day poverty line by 20 million in the

region.⁵ There was general acknowledgement that financial liberalization had outstripped regulation at the global level, increasing country and regional vulnerability. There were also fears of a protectionist reaction that could adversely affect labour markets and recovery.

Export-reliant countries hard hit

The more export-reliant countries in the region had bigger downturns in their GDP growth. Chinese GDP growth had dropped from 13 per cent in 2007, to 9 per cent in 2008, and was forecast to drop further to 6.7 per cent over 2009.⁶ In Japan, the economy was expected to shrink by 2.6 per cent in 2009. Meanwhile, growth in the ASEAN-5⁷ was forecast to fall from 5.4 per cent in 2008 to 2.7 per cent in 2009. In comparison, the less export-reliant countries have experienced more moderate, though still significant, downturns. For example, in India where manufacturing exports represent less than 10 per cent of GDP, growth was forecast to drop from 7.3 per cent in 2008 to 5.1 per cent in 2009.

Other economies extremely vulnerable

Other countries have also been impacted. Foreign direct investment (FDI) to developing countries is forecast to fall, which will impact enterprises and jobs. Major FDI recipients such as Cambodia, Fiji and Singapore are expected to be hit hard. Migrant remittances are likely to drop. This could have a profound effect on countries such as Bangladesh, Nepal, the Philippines, and Sri Lanka. Another major concern is falling domestic consumption and investment, which often comprise a larger share of GDP than exports.

Furthermore, the crisis of surging food and fuel prices before the financial crisis had already led to increased budget and balance-of-payments problems. Countries with limited fiscal space may also suffer from a potential decline in ODA.

Severe impact on the labour market

The ILO expected that the impact of this fall in GDP growth would be to increase unemployment by 23 million in 2009, nearly 6 per cent of the labour force in Asia and the Pacific. Impact on the conditions of work could be judged by the number of vulnerable workers, own-account workers and unpaid family workers. The Asia-Pacific region had 1.08 billion such vulnerable workers in 2008, some 60 per cent of the workforce, and these could increase by as much as 60 million in 2009. The pressures of reverse migration from downturns in receiving countries, cuts in the use of contract and migrant labour, and the virtual halt in hiring of young people who were already experiencing high unemployment rates, all added to the enormity of the challenges confronting the labour markets in the region. As a result, the numbers of working poor could increase by as much as 140 million by 2010.

⁵ *Coherent Policies for inclusive Growth and Decent Work – Challenges of the Global Economic Slowdown in Asia*, Keynote address by Dr. Ursula Schaefer-Preuss, Vice-President, ADB.

⁶ IMF: *World Economic Outlook Update: Global Economic Slump Challenges Policies*, January 2009.

⁷ The ASEAN-5 group includes Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand.

(b) Country perspectives

- **Indonesia:** The crisis had been preceded by high inflation and monetary tightening. In the third quarter of 2008, exports fell along with FDI inflows. The stock market fell, and the exchange rate depreciated, depleting reserves. The impact on unemployment estimated so far was an increase of half a million. The policy response had been a combination of monetary and fiscal stimulus measures, complemented by a World Bank support loan of \$1 billion.
- **China:** Even during years of rapid growth, China had faced a substantial jobs deficit in part due to an increasing workforce and labour shedding as state-owned enterprises reformed. The slump in export demand due to the crisis had led to factory closures, with an estimated 20 million rural migrant workers laid off and 7 million recent graduates unable to find work. Policy had focused on a \$586 billion reflationary package, aimed at reducing interest rates, generating demand, creating jobs and strengthening social protection.
- **Philippines:** Growth prior to the crisis had not generated sufficient employment opportunities, resulting in increasing inequalities and a domestic market supported mainly by remittances. Exports had been hit by the crisis, domestic and foreign investment had dropped and unemployment was rising. Since October 2008, over 80,000 workers had been displaced and around 5,000 overseas Filipino workers had been repatriated. Fiscal policy was focused on increasing public spending for infrastructure and social transfers.
- **Viet Nam:** With the next highest GDP growth rate in the region after China, growth in Viet Nam had been sustained by very high levels of investment. Rising labour costs in China had also begun to divert production to Viet Nam, not only in garments and footwear, but also in electronics and heavy industry like steel. Hence, FDI inflows had also surged. The high GDP growth had stoked double-digit inflation prior to the crisis while a mounting current account deficit had depreciated the exchange rate. Cyclical policy to counter both had raised interest rates. Falling export demand now threatened gains in employment and poverty reduction.
- **Pakistan:** GDP growth of 5.8 per cent was hit by a rising fuel bill and food and fuel subsidies. This raised inflation and depleted currency reserves. Monetary tightening prior to the global financial crisis had raised interest rates. The crisis led to further outflows of FDI and portfolio capital, necessitating an IMF loan. A Letter of Intent signed with the IMF had led to a pro-cyclical policy of increased interest rates and a lowered budgetary deficit. As a result, GDP growth was expected to halve, registered unemployment was rising, and poverty gains were expected to be reversed.
- **Thailand and Malaysia:** The Asian financial crisis of the late 1990s had been compounded by deflationary policies that amplified negative social impacts. Recovery from the 1997 crisis had been based on an increase in exports, helped by depreciating exchange rates and strong global demand. The current crisis had led to a fall in global export demand thus precluding this policy option. Recovery had to be based on a stimulus package to generate domestic consumption demand. Malaysia had lowered interest rates and was expected to raise the size of its stimulus package.

(c) Key areas for coherent policy response

The primary channel transmitting the global economic crisis to the region had been a contraction in demand for exports. The Asian region, and particularly East and South-East Asia, had increased its reliance on exports from 37 per cent in 1997, to 47 per cent by 2007. Further, 60 per cent of the final demand for Asian exports came from developed

countries. Hence, the contraction in incomes in the United States and Europe had drastically reduced their demand for exports from Asia. In China, for instance, export growth had contracted by 17 per cent in January 2009, compared to January 2008, the largest contraction in a decade.

The ILO had warned of the region's over-reliance on exports at the August 2007 Asian Employment Forum and on the need for restoring balance in the drivers of growth, by increasing reliance on the domestic market and consumption.⁸ Consumption had been weak in East Asia particularly, because of a weakness in its underlying determinants, employment and wages. The Forum noted that growth in the region had gradually become more capital-intensive, and more job weak. So a more coherent and balanced growth strategy was needed that relied on both exports and the domestic market, which in turn implied more emphasis on employment and incomes to support the domestic market.

Counter-cyclical policy for generating demand and employment

The Forum reviewed several macro policy instruments to generate employment and improve the wage share to raise consumption and domestic demand in the region. Monetary policy had to be loosened and interest rates pushed down to reduce the cost of borrowing for enterprises to grow and generate employment. This was being followed in a number of countries. Fiscal policy had to be expansionary, raising government expenditure, especially in infrastructure which was labour-intensive. Several countries had announced such packages.

Rising external and budgetary deficits

A second channel for spreading the impact of the crisis had been rising deficits, both external and budgetary, caused mainly by rising food and fuel prices during 2007–08. The large increase in fuel and food prices also spiked inflation and drained budgetary resources for governments attempting to cushion consumers through subsidies.

In addition, the current global financial crisis had led to a capital outflow from developing countries, exacerbating the current account constraint, and reducing investment, growth and employment. Pakistan had been particularly hard hit by this combination of balance-of-payments and budgetary deficits. Bangladesh, Indonesia and Viet Nam were also vulnerable on this count. A number of speakers at the Forum expressed concern that countries where the policy space to counter the downturn was limited needed support in finding a better balance between stabilizing macro fundamentals and restoring growth and employment.

Social dialogue is critical for effective policy responses

Social dialogue between workers' and employers' organizations and government was emphasized by many speakers as necessary to develop coherent policy responses to the crisis. Many speakers described efforts at national, sectoral and company level to activate mechanisms for dialogue and the development of consensual policy responses. Development of coordinated systems of industrial relations could help negotiate more coherent policies. At a time when economic developments threatened social progress and tensions were rising it was vital to enhance dialogue mechanisms to protect the most vulnerable, reverse the downturn and build a more sustainable recovery.

⁸ ILO: *Setting Policy Directions for Job Creation and Poverty Reduction*, Asian Employment Forum: Growth, Employment and Decent Work, Beijing, 13–15 August 2007.

An explicit gender lens on policy

The Forum noted that with more women employed in export industries, the downturn was expected to hit women's employment hard.⁹ Existing social security systems in the region were also weaker for women because they were based on a model of regular employment for one male main income earner. This left women more vulnerable to the crisis, and also their children, given the relatively higher share of women's income going to the household. Policy responses therefore needed an explicit gender lens. Stimulus packages based on construction sometimes used a very low percentage of women, for instance.

Building an effective social floor

The Forum discussed the need to rethink social policy not as a cost but as an investment in human resources. Extension of basic social protection to all women and men should be part of the development agenda. The bill for social protection, as a percentage of GDP, was often not large, while its multiplier effect on economic activity was noted to be very high. Universal systems were preferred because they avoided costly administration, could be introduced fairly quickly and had a big impact on poverty reduction even if benefits were set at modest levels. Social protection put a floor under the consumption of the household and the economy. Enhancing the coverage of social protection therefore worked as both a social and fiscal stabilizer.

There was much interest in a presentation by the Deputy Secretary-General of the China Development Research Foundation, Tang Min, of a vision to introduce pensions, health insurance, free education and employment promotion for all low-income citizens by 2012, and for all Chinese by 2020.

The innovative experience of India's National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) evoked considerable discussion. The NREGA guaranteed 100 days of work in the year for households, with 33 per cent of the employment reserved for women, on infrastructure projects. An estimated 1.4 billion person days of work was generated over 2007–08 at a cost of 0.5 per cent of GDP. The scheme offered work at the prevailing minimum wage for agriculture and was thus helping to ensure greater compliance with minimum wages in rural areas. Such a programme generated both employment and domestic demand, both critical for crisis policy, especially for countries with limited policy space. It was also noted that there was a vital role for the social partners to ensure that rights and benefits were respected by the local administrator of the scheme.

In large parts of Asia, migrants to the cities from rural areas had filled the jobs created by the export boom. While offering better earnings prospects than agricultural work, wages had often been low, employment contracts precarious and social protection weak. With falling export demand, returning domestic and international migrants¹⁰ needed both social protection and improved skills to survive and to return to employment.

Supporting sustainable enterprises

The ADB presented its work on structural transformation, based on evidence from Nepal, Pakistan and the Philippines. The study found spatial clustering of manufacturing

⁹ A. K. Dejardin and J. Owens: *Asia in the Global Economic Crisis: Impacts and Responses from a Gender Perspective*, ILO Technical Note, Geneva, 2009.

¹⁰ M. Abella and G. Ducanes: *The Effect of the Global Economic Crisis on Asian Migrant Workers and Government Responses*, ILO Technical Note, Bangkok, 2009.

sectors and offered new insights on ways in which public policy developed in dialogue with the private sector could support industrial development. Further work was suggested on the relationship between manufacturing and employment-intensive related services.

The Forum noted that both Bangladesh and Cambodia had been struck particularly hard by the downturn in garment exports. The policy response called for sustaining enterprises that were being squeezed between falling demand on the one hand, and increasing costs of scarce capital on the other hand. While countries could not control external demand, they could ease supply constraints through credit support, especially through microfinance for SMEs and promoting skills development programmes to increase productivity of their workforce.

The importance of a conducive environment for sustainable enterprises was a recurring theme especially in regard to the provision of finance for working capital, trade and investment.

(d) International and regional policy coherence

Ten years earlier, incoherent policies exacerbated the Asian financial crisis. The Forum urged that the current crisis required a more coherent policy response in Asia, with more consistent policy advice offered to both the countries initially impacted and those now suffering its contagious effects. The lessons learned from the previous crisis should not be forgotten, including the potential of regional mechanisms for financial coordination.

Coherence across institutions was particularly needed to support countries with reduced policy space for counter-cyclical expenditure for recovery from the crisis. Countries at the heart of the crisis were rightly following counter-cyclical strategies. On the other hand, more vulnerable countries, which were not responsible for the policy failures that led to the crisis, were left with few options.

ODA had to be maintained to support countries with limited fiscal space. An additional source of finance could be a social investment fund, possibly set up under the aegis of a regional institution like the ADB. Indeed the ADB was proposing to go to its Board for enhanced contributions for crisis support.

Dialogue across institutions through an international forum was also needed to ensure coherence of policies. Such a forum should represent both industrialized and developing countries, while also ensuring efficiency and effectiveness.

The involvement of ILO tripartite constituents was seen as indispensable for coherence and consensus on national policies to counter the crisis. A good example of national policy coherence was afforded by the Philippines Development Forum steered by the Department of Finance and the World Bank, which had been set up to allow policy dialogue across line ministries of the government, international development partners, the private sector, NGOs and academia.

(e) Conclusions: principles for policy responses

The Forum concluded with a tripartite panel which highlighted several key principles for policy responses.

- Governments should actively promote social dialogue at national, regional and local levels.
- Focus should be placed on the right to work, and rights at work, for formal, informal, and migrant workers, with additional attention on women's rights.

- Collective bargaining should be promoted as a means of conflict prevention, and as a tool for promoting better working conditions, higher productivity, and competitiveness.
- Policy should be framed through tripartite exchange of experiences, dialogue, and quick reaction to rapidly changing conditions.
- Asian economies should focus on stimulating domestic demand and purchasing power within countries, and across the region.
- Employment promotion and social protection programmes must be developed.
- Reduced fiscal space should be addressed through regional collaboration and greater international support.
- Decent work should be mainstreamed in all economic and social policies.

Anexo V

Outcomes of the Preparatory Meeting of Experts on the 1st African Decent Work Symposium on «Together addressing the implications of the financial and economic crisis on Africa's peoples» (Addis Ababa, 27–28 February 2009)

Introduction

1. The Preparatory Meeting of Experts was convened by the ILO Regional Office for Africa in Addis Ababa on 27–28 February 2009. The aim of the meeting was to prepare for the 1st African Decent Work Symposium on «Together addressing the implications of the financial and economic crisis on Africa's peoples», due to be held in Ouagadougou later in 2009 at the invitation and under the auspices of His Excellency, Mr Blaise Compaoré, President of Burkina Faso, in collaboration with the African Union Commission and the ILO.
2. The Meeting of Experts contributed towards strengthening the technical preparations for the symposium. Moreover, the meeting enabled African tripartite constituents to prepare for: (i) the ILO Governing Body Employment and Social Policy (ESP) Committee debate on the financial crisis (Geneva, 17 March 2009); (ii) the Special Meeting of the Tripartite African Members of the ILO Governing Body (Geneva, 20 March 2009); and (iii) the High-level Tripartite Meeting on the Current Global Financial and Economic Crisis (Geneva, 23 March 2009), as called for by the 303rd Session of the ILO Governing Body (Geneva, November 2008).
3. Participants in the meeting included government representatives, workers' and employers' experts, the African Union Commission, the African Development Bank, the UN Economic Commission for Africa, academics, and also ILO officials from headquarters and the region.
4. Participants recalled that the World Commission on the Social Dimension of Globalization had predicted many of the events that had led to the global financial, economic and job crises. They emphasized the importance of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization in the current crisis context, and highlighted the relevance of the *CEB Toolkit for mainstreaming employment and decent work* in formulating an appropriate response to the impact of the crisis.
5. The meeting took note of the draft symposium background document prepared by the ILO Regional Office for Africa, and of subregional presentations by ILO directors in Africa and also from various departments at ILO headquarters (Standards, Employment, Social Protection, Social Dialogue, International Institute for Labour Studies, and Policy Integration and Statistics).
6. Participants deliberated at length on the financial and economic crisis in order to address its implications for the people of Africa. At the end of the meeting, the following outcomes were adopted, together with the «African Decent Work Crisis Portfolio» (attached), in response to the economic, employment, labour and social impact of the financial and economic crisis.

From a financial to an African financial and economic crisis

7. The meeting noted that the prevailing financial and economic crisis is the culmination of a series of systemic social, institutional and economic factors, triggered by the subprime mortgage crisis in the United States. This crisis has now engulfed the entire globe, with grave consequences for the real economy, enterprises, workers and their families in Africa, and elsewhere in the world.
8. The meeting noted with concern that the financial and economic crisis has jeopardized Africa's growth and development prospects. In its latest update of 28 January 2009, the International Monetary Fund (IMF) predicts that, as a direct consequence of the global financial crisis, Africa's growth will drop to a low of 3.4 per cent in 2009, in contrast to 2007 and 2008, when the continent's economies grew by 6.2 and 5.2 per cent, respectively. Africa's integration into the global economy has meant that transmission mechanisms (trade, foreign direct investment (FDI), migrant remittances, official development assistance (ODA)) have facilitated the global spread of the financial and economic crisis to Africa. Moreover, with negative growth projections for Africa's main development partners in 2009, the meeting expressed concern about the adverse implications of the fall in FDI, export earnings, numbers of tourists, overseas development aid levels, the value of national currencies, and remittances from migrant workers.

The economic crisis leads to an employment crisis in Africa

9. The meeting recalled that, even with the relatively high growth the continent has been experiencing in recent years, poverty and unemployment levels have not been significantly dented. Therefore, a reduction in growth caused by the financial crisis will reverse the modest gains achieved in poverty reduction and compromise the prospects of achieving the Millennium Development Goals (MDGs).
10. The meeting took note of the data provided by the ILO's *Global Employment Trends* report (2009), which estimates that global unemployment in 2009 could show an increase of between 18 million and 30 million workers, and more than 50 million if the situation continues to deteriorate. Moreover, some 200 million workers, mostly in developing economies, could be pushed into extreme poverty.
11. With the financial and economic crisis, estimates are that employment growth in Africa is expected to weaken, pushing unemployment rates higher and forcing more workers into the already large informal economy, if not into extreme poverty.
12. Cases of company closures, postponed or cancelled investments (mainly in the mining, auto and finance/banking industries), and job losses across the continent were highlighted. In particular, the meeting noted with serious concern the loss of some 300,000 mining jobs in the Katanga province of the Democratic Republic of the Congo, and 36,500 jobs lost in the South African auto industry.

Crisis before the current crisis

13. The meeting noted that the financial and economic crisis is merely exacerbating the serious economic and social situation already existing in Africa. The crisis before the current crisis involved poverty, underemployment, rising inequality, unfair globalization and difficult social conditions for large segments of the population.
14. Moreover, the financial and economic crisis comes at a time when Africa is only just beginning to recover from the effects of the food and fuel crises.

Policy responses to the financial and economic crisis

15. In response to the crisis, the meeting noted the urgent need to support the vision of leaders who uphold principles and values of good governance at the continental, subregional and national levels.
16. The rights-based approach should be mainstreamed especially during the crisis period, in order to: (i) protect rights at work of workers who may become more vulnerable; (ii) reduce poverty and social crises; (iii) raise living standards; and (iv) enhance the quality of economic growth and social justice.
17. The meeting stressed the need for more research and analytical work on child labour, youth employment and HIV/AIDS.
18. Moreover, addressing the negative consequences of the financial and economic crisis needs to be done in a transparent and inclusive manner, using social dialogue.
19. While providing an enabling environment for the private sector to create employment and decent work opportunities, governments' regulatory role in the financial sectors, as well as governments' own potential to create jobs, needs to be strengthened.
20. Governments and enterprises need to invest in the gradual transition to renewable sources of energy, and to operationalize a «Green New Deal», as a way to improve living and working conditions through «green» job creation.
21. Because of non-existent or minimal social protection for all, targeted programmes to support vulnerable groups such as informal and rural workers, migrant workers, disabled persons, workers in the formal economy, women, children, youth and older people need to be put in place.

Role of institutions in response to the crisis

22. The meeting acknowledged the interventions by a number of governments and institutions in addressing the adverse effects of the financial and economic crisis on African economies, including the Addis Ababa Declaration on the International Financial Crisis, adopted by the 12th Ordinary Session of the Assembly of the African Union on 2–3 February 2009; and the Ministerial Conference on the Financial Crisis held in Tunis on 12 November 2008.
23. The meeting called for a comprehensive package of measures to be taken at the global, regional and national levels, to be complemented by measures taken by the ILO.

At the global level

24. The meeting highlighted the fact that no country or region can deal with the consequences of the crisis alone, hence global, coordinated solutions are called for.
25. Participants stressed that decent work must be at the centre of the policy response. The global response to the crisis must pursue the overarching objective of alleviating the burden of the economic downturn on people, especially vulnerable groups.
26. Under the auspices of the UN, the World Bank Group, the IMF, the World Trade Organization and the ILO should jointly develop a new regulatory framework for global finance, trade and labour markets. Ensuring coherent and coordinated policies and reform of the global economic governance architecture will ensure an effective response to the financial and economic crisis.
27. The African continent must have a greater say in institutions such as the World Bank, the IMF and the G20 that shape the global response to the crisis.

28. The global crisis response should not result in greater protectionism, although due measures must be taken to shelter nascent industries and developing economies.
29. Participants urged richer nations to make good their promise to double ODA to Africa by 2010, despite the current financial and economic crisis.

At the continental and regional levels

30. The meeting called for regional, coordinated and inclusive strategies, policy measures and programmes/initiatives to mitigate the economic, employment, labour and social impact of the financial and economic crisis.
31. The African Union's New Partnership for Africa's Development (NEPAD) should be revitalized and strengthened to boost the crisis response at the continental level, in substantive terms.
32. In order to reduce Africa's vulnerability to external shocks, the continent must accelerate regional integration, including removing all restrictions on the free movement of people, goods and services.
33. The acceleration of regional integration through the Regional Economic Communities (RECs) should be accompanied by substantial investments in regional infrastructure (transport, energy, telecommunications, IT) that create jobs, directly and indirectly, in the short and long term, provide incentives for local investments, and support more intra-Africa trade.
34. The financial crisis should be an opportunity for Africa to take stock of its dependency on and links with globalization and propose long-term solutions to its perennial challenges. As much as possible, the continent needs to propose long-term measures that will be key in terms of promoting the «localization» of the continent's development. In this context, the African Union, the UN Economic Commission for Africa, the African Development Bank and the RECs should identify Africa's comparative advantages (such as food production and the development of renewable energy sources) that can create new employment opportunities during and after the crisis.

At the national level

35. Governments should target their crisis-response interventions at players in the real economy, enterprises (particularly SMEs), workers and the self-employed; this should include investment in education, training, reskilling and counselling.
36. The meeting strongly encouraged governments to provide emergency financial support for enterprises facing financial difficulties owing to the financial and economic crisis.
37. Governments should use any available fiscal space to create social safety nets that fulfil the basic needs of the poor, and thus diminish the risk of social unrest. They should also ensure adequate mechanisms for conflict prevention, management and resolution, and promote initiatives that enhance social cohesion.
38. Governments should use available investment funds for employment-intensive ventures that create sustainable alternative employment opportunities for redundant workers. Special attention should be paid to agriculture, agro-industries and food production.
39. Governments must improve governance of national resources, intensify their fight against corruption where it exists, avoid waste, and prioritize policy alternatives so as to use all available resources for development.
40. Governments should improve governance structures through the establishment of efficient labour administrations, labour market information systems and labour statistics offices to provide reliable data for the articulation of efficient labour market policies at regional and subregional levels.

41. The constituents should use the potential of the social economy for creating alternative livelihoods, providing microfinance solutions, boosting fair trade and establishing solidarity-based protection schemes.
42. Governments should encourage the building of the requisite physical infrastructure and communications, and simplify cumbersome customs, banking and foreign exchange regulations and immigration procedures, as a way of dealing with the transmission effect of the crisis.
43. To ensure domestic resource mobilization, African governments need to promote domestic tourism, mobilize local savings and local financial markets, promote intra-African trade and encourage export marketing and product diversification.
44. Governments, in full participation with employers' and workers' organizations, should assess the «greening» of existing industries to ensure that proactive measures are taken to enhance the sustainability of existing industries and jobs.
45. Participants recommended that all African Members of the ILO should set up or strengthen tripartite committees to develop crisis-response strategies at the national and sectoral levels through social dialogue. Where appropriate, additional stakeholders, such as relevant civil society organizations, should be invited to join such committees.

At the level of the International Labour Organization

46. The ILO should intensify the promotion of the Decent Work Agenda as the conceptual framework that guides the global response to the crisis. The CEB *Toolkit for mainstreaming employment and decent work* should be used as an instrument to harness the collective energy and expertise of the UN system in the pursuit of productive employment and decent work.
47. The ILO should re-visit the agendas of major forthcoming events, including the 2009 International Labour Conference, with a view to focusing them on the crisis response.

At the level of the International Labour Office

48. The ILO should take urgent measures to implement the attached African Decent Work Crisis Portfolio as amended and enriched by the Meeting of Experts, which constitutes an integral part of the present outcome document.
49. The ILO should devote more resources to strengthening social partners in order to enhance their ability to address the implications of the crisis. This should include training constituents in the use of the CEB toolkit.

The role of the social partners

50. To enable social partners to play their role in meaningfully addressing the implications of the current crisis, there is a need to build the capacity of governments, employers' and workers' organizations for participating in developing policies in order to address the implications of the financial crisis, as well as to design and implement relevant employment and decent work policies.
51. In order to monitor the impact of the financial and economic crisis with a view to proposing effective remedial measures, the meeting called for the setting up of regional, subregional and national steering committees in which social partners would be actively involved.
52. Workers' and employers' organizations should consult their counterpart organizations overseas in order to avoid xenophobic reactions to migrant workers in those countries.

53. Participants recommended the establishment of an early-warning system to inform members on how to deal with such crises in the future.

Appreciation

54. Participants applauded the invitation of His Excellency Mr Blaise Compaoré, President of Burkina Faso, to host the Symposium. They also paid special tribute to Mr Juan Somavia, ILO Director-General, and Mr Jean Ping, Chairperson of the African Union Commission, for their support to this initiative leading to the holding of the 1st African Decent Work Symposium, focusing on addressing the implications of the financial and economic crisis on the people of Africa.
55. Participants also acknowledged the message from the African group in Geneva, which constituted their input to the Addis Ababa meeting.
56. Participants welcomed the initiative of the ILO Regional Office for Africa in organizing the Meeting of Experts, and its commitment to providing the requisite technical and financial support for constituents on key issues, including the financial and economic crisis.

Apéndice

The African Decent Work Crisis Portfolio

(Addis Ababa, 28 February 2009)

An agenda for the people

Guiding principles:

- people-centred: focusing on Africa's workers, entrepreneurs and the self-employed;
- action-oriented: combining policies with specific programmes, using available tools and expertise;
- results-based: pursuing tangible outcomes and outputs;
- gender-balanced: caring for the special needs of women workers in Africa;
- in partnership: mobilizing the collective energy of the tripartite constituents, as well as the complementary expertise of UN sister organizations through the use of the Chief Executive Board (CEB) *Toolkit for mainstreaming employment and decent work*;
- pragmatic: complementing immediate emergency action with medium and longer term development programmes;
- integrated: providing a comprehensive response to the crisis on the basis of the Decent Work Agenda for Africa 2007–15 (DWAA) and the 2008 ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization.

Key orientations

- local development: to replace external engines of growth with domestic drives;
- regional integration: to reduce vulnerability to external shocks and create local regional markets;
- social economy: to mobilize traditional systems of solidarity and mutuality, and create alternative employment opportunities;
- social dialogue: to build consensus at regional, national, sectoral and enterprise levels.

Policy foundations

- the Decent Work Agenda for Africa 2007–15;
- the Ouagadougou Plan of Action;
- the conclusions of the International Labour Conference concerning decent work and the informal economy (2002); a fair deal for migrant workers in a global economy (2004); youth employment (2005); the promotion of sustainable enterprises (2007);

skills for improved productivity, employment growth and development (2008); and promoting rural employment for poverty reduction (2008);

- the report of the World Commission on the Social Dimension of Globalization;
- the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization;
- the six measures advocated by the Officers of the Governing Body in November 2008 (adequate credit flow, protecting the vulnerable, supporting enterprises, maintaining social progress, making use of social dialogue, maintaining adequate levels of development aid).

Principal target groups

- informal economy workers and operators in urban areas: they constitute the majority of the urban labour force in most African countries dominated by young people;
- rural workers and small-scale producers: they constitute the absolute majority of the labour force in many African countries;
- workers and enterprises in the formal economy: the backbone of Africa's economies.

The decent work crisis portfolio

An agenda for the people

Target group	Policies	Programmes	Tools/units
All	Advocate the centrality of productive employment and decent work in national development and crisis strategies	<p><i>Immediate action:</i> Provide technical assistance to national tripartite constituents to enable them to retain and create jobs and livelihoods. Reformulate existing Decent Work Country Programmes in light of the crisis. Reorient all ILO TC projects (including RBSA and TC), as well as RB and RBTC, to focus on the crisis response.</p> <p><i>Medium and longer term action:</i> Incorporate decent work priorities into national crisis response strategies, joint assistance strategies and UNDAFs. Incorporate lessons learned from the crisis into second generation Decent Work Country Programmes.</p>	<i>CEB Toolkit for mainstreaming employment and decent work;</i> Employment Sector; Turin Centre
	Effective implementation of fundamental principles and rights at work; implementing labour standards in the workplace;	<i>Immediate action:</i> Ensure the continued enforcement of fundamental rights, ratified Conventions and national labour codes in the crisis context.	International Labour Standards Department
	ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work	<i>Medium and longer term action:</i> Extend the application of fundamental principles and rights at work to the informal economy and rural workers.	International Labour Standards Department
	Investing in basic social protection packages for poverty reduction	<i>Immediate action:</i> Provide emergency assistance to the most vulnerable, including cash transfers, and invest in basic social protection packages.	Cash transfer programmes

Target group	Policies	Programmes	Tools/units
		<i>Medium and longer term action:</i> Assist member States in developing social security policies and adopting comprehensive social security schemes that provide protection against future crises.	STEP Programme, Social Security Department
	Improving information for better policies	<i>Immediate action:</i> Assist member States in monitoring the impact of the crisis on jobs and livelihoods in a gender-sensitive manner, as well as the crisis response by member States, including the establishment of national observatories.	Headquarters and field units involved in the Labour Market Information Network (including the Turin Centre)
		<i>Medium and longer term action:</i> Improve national labour market information systems and institutions.	Employment Trends Department; Bureau of Statistics
Informal economy workers and operators	Escaping the informal economy trap;	<i>Immediate action:</i> Strengthen voice and representation of workers and operators through a vibrant social economy. Provide emergency employment opportunities through labour-intensive projects. Extend social protection through mutual insurance schemes. Facilitate a variety of microfinance services for job creation and social protection. Prevent the expansion of child labour through targeted interventions.	SYNDICOOP; Employment Intensive Investment; STEP; Social Finance; IPEC; Skills and Employability Department
	Decent work for Africa's youth; ILC conclusions concerning decent work and the informal economy; ILC conclusions concerning youth employment		
		<i>Medium and longer term action:</i> Improve working conditions. Organize informal economy workers and operators in self-help organizations, in partnership with workers' and employers' organizations. Upgrade informal apprenticeship systems. Incorporate informal workers and operators into formal social security schemes.	WIND/WISE; COOP; ACTRAV; ACT/EMP; Skills and Employability; Social Security
Rural workers and small-scale producers	ILC conclusions on promoting rural employment for poverty reduction (2008)	<i>Immediate action:</i> Introduce price stabilization mechanisms. Consolidate the self-help organizations of small-scale producers, including their unions and apexes, in order to improve their bargaining power, voice and representation. Extend financial intermediation through the promotion of rural financial institutions (SACCOs).	STEP; COOP Africa; Social Finance; IPEC; Employment Intensive Investment
		Prevent the expansion of child labour through financial support to rural families. Improve rural infrastructure through labour-based programmes.	
		<i>Medium and longer term action:</i> Extend social protection through the modernization of traditional systems of solidarity. Assist in negotiating fair trade agreements (social economy). Promote «green jobs» initiatives in rural areas. Develop integrated local employment programmes using the PEETT approach. Promote appropriate skills training opportunities in rural areas. Develop pro-poor tourism in rural areas. Improve working conditions using the WIND approach. Domesticize ILO Conventions and Recommendations specific to rural workers and producers. Create off-farm employment through	Local Economic Development Programme; Policy Integration and Statistics Department; Sectoral Activities; Skills and Employability; TREE; WIND; International Labour Standards

Target group	Policies	Programmes	Tools/units
		the transformation of, and addition of value to, agricultural products.	
Formal workers and sustainable enterprises	Investing in enterprises and decent work opportunities in Africa; ILC conclusions concerning the promotion of sustainable enterprises (2007)	<i>Immediate action:</i> Establish partnerships with other agencies (World Bank, IMF, UNIDO, etc.) to provide emergency assistance to enterprises facing financial difficulties. Provide alternative employment programmes through State-sponsored investment programmes. Assist workers in taking over bankrupt enterprises (Argentine <i>empresas laborales</i>). Provide assistance to national authorities in the revision of labour laws in light of the crisis.	SEED, Job Creation and Enterprise Development Department; Employment Intensive Investment; Social Dialogue Sector
		<i>Medium and longer term action:</i> Provide microfinance solutions to redundant workers wishing to create their own enterprises. Improve the productivity of enterprises through targeted interventions (productivity centres). Accelerate regional economic integration.	Social Finance; COOP; Job Creation and Enterprise Development; ROAF
	Closing the skills gap; ILC conclusions on skills for improved productivity, employment growth and development (2008)	<i>Medium and longer term action:</i> Develop retraining and reskilling programmes for redundant workers.	Skills and Employability; SEED; Economic and Labour Market Analysis Department
		<i>Immediate action:</i> Provide assistance to tripartite bodies set up at the national, sectoral and enterprise level with the aim of minimizing the impact of the crisis on jobs and incomes.	Social Dialogue; ACTRAV; ACT/EMP
	Tripartism as a key governance mechanism for inclusive poverty-reducing growth	<i>Medium and longer term action:</i> Support member States in strengthening inclusive social dialogue institutions.	Social Dialogue; ACTRAV; ACT/EMP
		<i>Immediate action:</i> Assist member States in creating social safety nets for workers who have been made redundant; emergency employment programmes through labour-based approaches.	Social Security; Employment Intensive Investment; ASIST
Social inclusion through job creation for conflict prevention and reconstruction	<i>Medium and longer term action:</i> Promote comprehensive local development strategies and the social economy to promote sustainable job creation at the local level.	Local Economic Development; COOP; Social Finance	
	<i>Immediate action:</i> Reorient existing labour migration projects to address the crisis. Assist and reintegrate returning migrant workers in their home countries.	International Migration Department, including the MIGSEC project and RBSA on migration	
A fair deal for Africa's migrant workers; ILC conclusions on a fair deal for migrant workers in a global economy (2004)	<i>Medium and longer term action:</i> Ensure the portability of social security benefits for migrant workers in collaboration with Regional Economic Commissions	Social Security and International Migration Departments	